

**Mutación, crisis, recomposición,
y otra vez crisis de la representación política
en la ciudad de Buenos Aires.
Los avatares del signo progresista.**

Sebastián Mauro

Que las cosas ya no son como antes, nadie lo niega. Partidos que ya no son lo que antaño, partidos que han dejado de ser; una agenda definida en los medios de comunicación de masas, según sus propias reglas de visibilidad; ciudadanos independientes, indecisos, libres, sueltos, desafiliados, desconfiados. Frente a estos fenómenos, hace ya 15 años Bernard Manin se preguntaba si asistíamos al peligro de desaparición del lazo representativo mismo, o si se trataba de un proceso histórico de transformación de más largo aliento. En la Argentina post 2001 había poco lugar para dudas: si bien era cierto que muchas de las reglas del juego político habían cambiado a lo largo de la década de los '90 (Cheresky y Blanquer: 2003; Cheresky y Pousadela: 2004), tampoco se podía negar que el escenario de fragmentación e incertidumbre imperante era signo de una crisis profunda de la representación política.

Ahora bien, reconstruidos ciertos puntos de certidumbre en diversas coordenadas de la vida social (especialmente, en cuanto al rumbo de la economía, pero también respecto de la distancia entre "la clase política" y la ciudadanía), encontramos una competencia política todavía signada por la personalización, la fragmentación y la fluctuación, y a un electorado cuyo comportamiento se encuentra disociado de las tradiciones y lealtades partidarias de antaño. Surge, entonces, la necesidad de plantearse ciertos interrogantes: ¿hasta qué punto hemos salido de la crisis?, ¿en qué medida el escenario actual no revela que ciertos elementos, identificados otrora con la disolución del lazo representativo, son hoy muestra de que la relación entre representantes y representados se ha reconstruido sobre la base de una nueva dinámica, más fluida y contingente, y más abierta a situaciones críticas, por cierto?

En el presente artículo trataremos tales cuestiones, basándonos en el análisis del distrito donde el campo de la competencia política se (re/des)estructura con mayor claridad bajo estas nuevas reglas: la ciudad autónoma de Buenos Aires. En este sentido, a lo largo del presente trabajo se demostrará que la competencia política no se configura alrededor de una continuidad partidaria o ideológica, sino a través de la rearticulación periódica de las identidades políticas en la *puesta en*

escena de una serie de principios de diferenciación política, que ubica a los liderazgos en posiciones novedosas y reagrupa las preferencias electorales de manera fluctuante.

De la transformación a la crisis

Las terceras fuerzas y la centralidad del progresismo

Desde el retorno de la democracia en 1983, una serie de transformaciones fueron sucediéndose en el modelo representativo argentino, variando su intensidad y extensión según la coyuntura. En este sentido, luego del cambio de reglas que implicaba la derrota del peronismo en las presidenciales a manos de Raúl Alfonsín, y de la consecuente reorganización del movimiento en una expresión electoral más estructurada, un cúmulo de profundas y vertiginosas transformaciones se produjo durante la primera mitad de la década de los noventa.

La génesis de estas transformaciones está en una crisis: la hiperinflación de 1989 sumió a los actores sociales en una situación de "disponibilidad" que habilitó al gobierno de Carlos Menem a realizar un radical programa de reforma estructural (Palermo y Novaro: 1996; Aboy Carlés: 2001). En su primera etapa, la política menemista logró la estabilidad monetaria y cierto crecimiento económico, pero dentro de un modelo de fenomenal exclusión y fragmentación de la estructura social, acompañado por una integración dependiente en el sistema internacional, que finalmente condujo al estancamiento y la recesión. Respecto del ámbito político institucional, ya no existía una amenaza autoritaria a la democracia, pero las prácticas institucionales eran deficientes, marcadas por el decisionismo presidencial y por una degradada división de poderes (Cheresky y Blanquer: 2003).

En sintonía con dichas transformaciones en la estructura económico-social, el sistema representativo sufrió profundas mutaciones en su composición y dinámica, análogas a los cambios en las democracias de otras latitudes. En este sentido, el deterioro de las lealtades partidarias, la fluidez en la construcción de la oferta política en períodos electorales, y la fluctuación del comportamiento ciudadano en dichos contextos, son las características sobresalientes de un período marcado por la fragmentación y el debilitamiento de las tradiciones y formas de agregación correspondientes con clivajes sociales relativamente estables (Novaro: 2000).

La ciudad de Buenos Aires fue uno de los primeros distritos en los que dichos fenómenos se presentaron concretamente: el triunfo del justicialismo y el surgimiento de una tercera fuerza electoralmente relevante como el Frente Grande;

significaron una novedad contundente en la dinámica política local, signada por el predominio del radicalismo, como así también en la nacional, caracterizada por un bipartidismo apenas acompañado por fluctuantes terceras fuerzas. La centralidad de la expresión de centroizquierda sería confirmada por los triunfos en las elecciones nacionales de 1994 (Convencionales Constituyentes) y 1995 (Ejecutivo y Cámara Baja), y en la relevante performance en los comicios de 1996 (primera elección a Jefe de Gobierno porteño y a Convencionales Constituyentes de la ciudad).

Una vez reelecto Carlos Menem, y ya dirimida la importante cuestión de la autonomía de la ciudad de Buenos Aires, que instalara a Fernando de la Rúa al frente del Ejecutivo porteño, un amplio nivel de descontento social incentivó el reagrupamiento de sectores de oposición. La Alianza construida entre la UCR y el Frepaso, reveló una inmediata eficacia electoral en los comicios legislativos de 1997¹, que residía en la condensación de dos expectativas divergentes del electorado: para algunos, la Alianza expresaba una alternativa al modelo neoliberal impulsado por el menemismo, mientras que para otros, significaba la oposición a un estilo de gobierno transgresor de las normas institucionales. La articulación discursiva de ambas reivindicaciones se operó a partir de la noción de *corrupción*, identificada como amenaza a la realización plena de la democracia (en tanto transgresión al imperio de la ley) así como a la realización personal de los ciudadanos honestos (en tanto la exclusión y el desempleo eran inteligidos como sus efectos). En este discurso, bastaba con erradicar a la *corrupción* (entendida como atributo personal de Menem y sus funcionarios) para solucionar la pobreza, la desocupación y la marginalidad; volviendo verosímil la continuidad de la versión periférica del modelo neoliberal con el objetivo de equidad social (Mauro: 2005).

Sobre este marco descriptivo, la Alianza se impuso en las presidenciales de 1999, arrastrando el cambio de signo de varios gobiernos locales (Cheresky y Blanquer: 2003). A varios meses de iniciada la nueva gestión nacional, Aníbal Ibarra accedió a la Jefatura de Gobierno luego de ganarle a la fórmula Domingo Cavallo-Gustavo Béliz², bajo la continuidad de cierto clima de "cambio de época", cuyo predominio fue particularmente breve. Una vez instalada la Alianza en el gobierno nacional las promesas de cambio se vieron frustradas. El rumbo neoliberal fue sostenido y profundizado, al igual que la falta de transparencia en las decisiones gubernamentales, incentivando un clima general de rechazo hacia los líderes políticos. De esta forma, la *corrupción* seguía operando como frontera entre identidad y alteridad, pero se había desplazado hasta abarcar a *la clase política* toda, como contraria a los intereses de *la gente*.

La crisis y posterior caída del gobierno aliancista hicieron visibles los límites del discurso "anticorrupción", que desligaba al progresismo de cualquier intento de reforma estructural del modelo socioeconómico, a partir de una descripción de los problemas de agenda en términos personalistas y, en algún sentido, moralistas y potencialmente impolíticos (Mauro: 2005). Diciembre de 2001 abrió la posibilidad de discutir los condicionamientos de la estructura socioeconómica en la resolución de las demandas populares, al presentarse la contingencia de ciertos axiomas del discurso predominante en los noventa. Esta apertura se produjo en una coyuntura crítica de disolución y emergencia, en la que el gobierno de Eduardo Duhalde asumió la recomposición, conflictiva, precaria y, eventualmente, represiva, de la agenda temática sobre el marco general de un clima de "transición" hacia un período indeterminado de recambio político.

De la crisis a la transformación

Recomposición política kirchnerista y reelección de Aníbal Ibarra

Sobre la visagra duhaldista, que estabilizara la economía y redujera la incertidumbre respecto del futuro del lazo social mismo, a costa de la represión de otras alternativas visibilizadas por la apertura de la agenda temática, se edificó gran parte de la frontera kirchnerista. La política de derechos humanos, la salida del *default*, la renovación de la Corte Suprema y, especialmente, la reorientación estratégica hacia la región, eran exhibidos como señales de un "giro progresista" en la política argentina. Dicho discurso recuperaba ciertos elementos centrales de la retórica de la segunda mitad de los noventa: el efecto de frontera con un pasado demonizado se edificaba sobre la idea de *la corrupción*, imputada a toda una década, es decir, especialmente al menemismo pero eventualmente al conjunto de la clase política como ajena a las necesidades de *la gente*.

En la ciudad de Buenos Aires, dichas tendencias se presentaron con una intensidad destacable. Por un lado, la capital aparecía como el distrito donde la desafección ciudadana y la fragmentación política habían avanzado más rápidamente (Cherny y Natanson: 2004). En este sentido, el surgimiento recurrente de nuevas fuerzas políticas (Frepaso, Acción por la República, Nueva Dirigencia, ARI, Autodeterminación y Libertad, Recrear) no sólo había forzado una estrategia coalicional por parte de las fuerzas tradicionales, sino que había delineado un sistema personalizado y fluctuante para el ordenamiento de la competencia electoral. En forma concurrente, el distrito hubo de convertirse en la caja de resonancia de la crisis de representación. En legislativas del 2001 se conformó un escenario electoral fragmentado y con un monumental índice de abstencionismo y

rechazo a la oferta política toda³, mientras que los sucesos de diciembre, y las posteriores protestas, especialmente de los ahorristas y de las asambleas barriales, tuvieron su epicentro en la ciudad de Buenos Aires.

En las elecciones presidenciales de 2003, el electorado porteño no tomó necesariamente partido por alternativas progresistas, aunque sí mantuvo su tradicional tendencia a favorecer a candidatos no peronistas: tanto Ricardo López Murphy como Elisa Carrió superaron su performance media nacional, mientras que para los tres candidatos de origen peronista la tendencia fue inversa⁴. No obstante, es necesario considerar estas observaciones en términos de tendencias (en el marco de un escenario fragmentado y confuso) y no de realidades absolutas: en primer lugar, porque la performance conjunta de los tres candidatos peronistas superó el techo del justicialismo en comicios anteriores (incluso en el histórico triunfo de Erman González en 1992), y, en segundo lugar, la buena performance de Carrió en la capital apenas superaba por décimas los votos acumulados por Néstor Kirchner.

En este contexto de incertidumbre, el titular del Ejecutivo local, Aníbal Ibarra, aparecía como candidato con chances de representar a la centroizquierda, reteniendo la legitimidad de la retórica progresista del Frepaso sin haber sucumbido ante la debacle de la Alianza. Pero la construcción del espacio que lo sostendría en los comicios no fue producto inmediato de este “parecido de familia” en la identificación ideológica, sino que requirió de múltiples usos instrumentales de la legislación electoral para instalar una escena de polarización (Mauro: 2005). El manejo estratégico del calendario electoral restringió el número de candidatos, impidiendo primero que los candidatos presidenciales (como Carrió) “bajaran” al distrito al acercar los comicios locales a los nacionales; y, luego, al prorrogar la fecha a instancias de la Justicia, permitiendo que la reconfiguración política producida por la asunción del nuevo gobierno relocalizara a otras figuras lanzadas a la competencia (como Scioli, Béliz y Bielsa).

La competencia se estructuró, de esta forma, en torno a cuatro personalidades competitivas en las encuestas, con gran autonomía para tejer alianzas a su medida: el Jefe de Gobierno (que logró aglutinar al ARI, al Frente Grande y al Socialismo, junto con fragmentos del PJ y la UCR, y movimientos sociales, colgando al mismo tiempo boletas de otros entramados para los cargos legislativos), el empresario y dirigente futbolístico, Mauricio Macri (cuyo conglomerado se estructuraba en torno al PJ capital, al que se agregaban diferentes personalidades de trayectorias y pertenencias diversas), Luis Zamora (cuya lista era encabezada por figuras surgidas del movimiento asambleario de 2002) y

Patricia Bullrich (aliada con el candidato presidencial de mejor performance en la ciudad, Ricardo López Murphy).

Dado este marco de fragmentación, transversalidad y personalismo a la hora de constituir las opciones electorales, la imagen de los candidatos fue el recurso capital sobre el que se edificó toda la campaña, y el eje de diferenciación sobre el que los candidatos constituyeron sus perfiles tuvo como componente fundamental a la *corrupción* (Mauro: 2005).

Aníbal Ibarra enmarcó la elección bajo la consigna del “cambio de rumbo” progresista encabezado por Néstor Kirchner. El signo progresista de la propuesta de Ibarra dependía del contraste con la identificación entre Macri y un *pasado* investido por la *corrupción*, sindicándolo como beneficiario de la corrupta gestión de lo público que signó a la década menemista. En tal sentido, la *corrupción* de la *vieja política* aparecía así en los términos de una “privatización” de los bienes públicos, mientras que el progresismo era depurado de sus componentes ideológicos para identificarlo con la protección de un espacio neutral, ajeno a la lucha política, frente a la amenaza de apropiación. De esta manera, su lugar de defensor del bien común frente a la perspectiva “privatista” de Macri lo colocaba en un lugar potencialmente apolítico, de defensor de los intereses de *todos* frente a los intereses de *algunos*. Según este discurso, los beneficiarios de ese pasado corrupto representaban una amenaza en sentido doble: por un lado, eran los culpables de la crisis y de la degradación de la Argentina; y, al mismo tiempo, ese pasado estaba al acecho, “golpeando la puerta” para cortar con el proceso de recuperación del país (Mauro: 2005).

La enunciación del macrismo, por otra parte, también se hacía eco de los discursos asociados al “que se vayan todos”, pero en los términos del cansancio de *la gente* frente a la ineptitud y estafa de *los políticos*. En este sentido, tal como hemos señalado, la experiencia de la Alianza había generado un clima de malestar hacia “la clase política” toda, definida como una corporación dedicada al ejercicio de la retórica para obtener cargos y luego no solucionar los problemas de los ciudadanos. De esta forma, tanto el progresismo como el sector identificado con la centroderecha, compartían un modelo de diferenciación con el pasado reciente (la “vieja política”), caracterizado por la debacle y la corrupción, entendida ésta última como obstáculo para la plenitud de todos en beneficio de algunos.

El clivaje político construido alrededor de un “pasado corrupto” y un “presente progresista” estructuró la comunicación política, tanto en momentos de normalidad como de crisis, durante toda la gestión ibarrista (Mauro y Natanson, 2006; Mauro y Montero, 2006). Este principio de diferenciación (y de inteligibilidad), que bastaba para que el Jefe de Gobierno retuviera importantes

índices de popularidad, se mostraba insuficiente para sostener la coherencia del armado político que lo apoyó en su reelección, siendo Fuerza Porteña uno de los primeros espacios en fragmentarse en la Legislatura de la ciudad, rearticulándose según sus pertenencias de origen. Una centrifugación más violenta, sin embargo, sufrieron los bloques que sostuvieron las candidaturas de Patricia Bullrich y Luis Zamora, quebrando la coherencia de un campo político dividido en cuatro espacios ideológicamente identificables y generando una dinámica de intercambios personalistas. En este contexto, se registraría flujo de legisladores que apoyaron la coalición entre Patricia Bullrich y López Murphy pasaron a las filas progresistas del ARI (se trata de los legisladores Velasco y Estenssoro), mientras que, con el correr de los meses, se iría conformando un relevante bloque kirchnerista, nutriéndose de los referentes del justicialismo que habían ingresado al órgano legislativo en las listas que apoyaron a Mauricio Macri (Rebot, Farías Gómez, Bello y Bargenfeld), fenómeno también registrado en la Cámara de Diputados (donde 3 de los 5 diputados macristas pasaron al kirchnerismo).

Este funcionamiento se vio puesto a prueba en coyunturas críticas, como en el debate sobre la reforma del Código Contravencional, que generó violentos reclamos y derivó en la primera reestructuración del gabinete de Néstor Kirchner (Mauro y Natanson: 2005) o sobre educación sexual y salud reproductiva, en los cuales, realineamientos profundos mediante, la frontera entre centroderecha y centroizquierda parecía reavivarse, pero en relación a temas heterogéneos, y con aliados disímiles y de difusa trayectoria. En este último grupo podemos ubicar al ecléctico Partido de la Ciudad⁵, una fuerza política sin trascendencia que logró en 2003 el 10% de los sufragios colgando su lista de legisladores de la candidatura de Aníbal Ibarra, y que luego se contaría entre los más acérrimos partidarios del proyecto de reforma del Código Contravencional, aliándose con Recrear y el macrismo.

Y otra vez a la crisis

De la fragmentación legislativa a la destitución de Ibarra

En este escenario de fragmentación de los bloques y fluctuación de los posicionamientos ideológicos y políticos, el incendio del microestadio República de Cromagnon durante un recital, con su saldo de 194 muertos, puso en crisis la legitimidad y hasta la continuidad del Jefe de Gobierno, reduciendo a la nada los recursos políticos y administrativos que ostentaba. La crítica a la ineficiencia del gobierno porteño, combinada con la suposición de coimas a los organismos de control, hizo factible la articulación entre la *inseguridad* (entendida como la

desprotección de los ciudadanos por parte del Estado frente a la falta de escrúpulos de los empresarios, es decir, como la desprotección de "todos" frente a los intereses de "algunos") y la *corrupción* (definida, como señaláramos anteriormente, como la gestión de los bienes de "todos" en beneficio de los intereses de "algunos"). El incumplimiento de la protección de los ciudadanos por parte del Estado fue entendido como síntoma de una estafa de *los políticos*, que prometen para hacerse con el cargo y luego no cumplen con una gestión eficiente.

En esta concepción que hilvanaba *ineficiencia, corrupción e inseguridad*, las protestas de los familiares de las víctimas se acercaron al marco interpretativo que había ofrecido Mauricio Macri en 2003, encontrándose su fuerza, entonces, no sólo con la ventaja institucional de un bloque numeroso y relativamente homogéneo, sino también con un lugar de enunciación verosímil para ejercer oposición al titular del Ejecutivo local, lo que derivó en sostenidos intentos por desestabilizar al Jefe de Gobierno en su cargo. En esta línea el macrismo encontró la compañía férrea de los partidos de izquierda, y un aliado renuente en el ARI, otrora parte importante de la coalición progresista gobernante.

Ahora bien, las intervenciones del macrismo dentro de esta estrategia fueron entendidas por el público como desproporcionadas, lo que hizo verosímil la rehabilitación, por parte de Ibarra, de la "amenaza" que volvía del pasado para interrumpir el curso progresista que estaban llevando adelante la ciudad y la Nación⁶. En este sentido, el Jefe de Gobierno invertía los términos de la denuncia que lo señalaba como principal responsable de la catástrofe para sugerir un intento de "golpe institucional" y recurrir una vez más al fantasma que lo colocaba al frente (o, al menos, en el centro) del arco progresista de la ciudad, que defiende los bienes públicos de un pasado privatista.

En medio de este proceso se produjo el ciclo electoral 2005, en el que se renovaba la mitad de la Legislatura que tenía en jaque al titular del Ejecutivo local, así como también la mitad de la representación porteña en la Cámara Baja. La conformación de la oferta electoral puso de manifiesto que tanto la multiplicación de fuerzas políticas, como la fluctuación de los sellos partidarios no fueron fenómenos excepcionales, producto de la incertidumbre política post 2001, sino características distintivas de la nueva formación política. Con un oficialismo porteño borrado de la competencia electoral, la escena se constituyó sobre la base de otro juego de diferenciaciones, colocando como actores centrales a tres fuerzas políticas:

1. Compromiso para el Cambio, ahora asociado a Recrear en la Alianza Propuesta Republicana (PRO), realineando el juego de fuerzas de la ciudad y dejando a Patricia Bullrich sin respaldo político.

2. ARI, instalado ahora en el rol de oposición, tanto a nivel local como nacional, presentando una heterogénea oferta producto de dos criterios de nominación contradictorios : la voluntad expresa de Carrió (imponiendo la candidatura de Enrique Olivera, en busca de incorporar un perfil de gestión, y de acercarse a un disperso imaginario identificable con la tradición de la UCR) y las negociaciones entre los referentes del ARI capital, cuya institucionalización estaba suficientemente avanzada.

3. El Frente para la Victoria, que no había participado de los comicios locales de 2003, en los que terminó apoyando improvisadamente a Ibarra (colgando las listas encabezadas por Miguel Bonasso y Diego Kravetz). Luego de la recomposición del PJ porteño bajo el liderazgo de Alberto Fernández, presentaba una oferta claramente identificada con dos tipos de candidatos: aquellos liderazgos de popularidad constituidos en la escena pública (sobre los cuales se edificó una lista de candidatos a diputado "progres" y no peronistas) y otros basados en un capital organizativo con implantación social, territorial o sindical (sobre los cuales se constituyó la lista de legisladores locales, más ligada al "aparato" peronista).

No sólo el Jefe de Gobierno había desaparecido de este campo de fuerzas, también Patricia Bullrich y Luis Zamora quedaron en una posición marginal, producto de la extraordinaria erosión de sus fuerzas a nivel legislativo, lo que revelaba una fuerte dificultad para mantener las alianzas políticas y para sostener un espacio de enunciación políticamente relevante en tiempos de normalidad o en coyunturas críticas.

Con esta escena configurada, la campaña electoral adquirió una significación diferente a la de 2003. La reinterpretación kirchnerista de la crisis y la recomposición, funcionó como marco de referencia para cualquier discurso que pretendiera ser políticamente eficaz, pero los sectores opositores ensayarían un desplazamiento de esta descripción de la realidad. Frente a la centralidad de la enunciación kirchnerista, el discurso opositor no asumió la forma de una rivalidad directa y absoluta (como lo sería posteriormente, durante el ciclo 2006-2007), sino que se instaló a partir de la coincidencia sobre ciertos elementos cuyo sentido fue tendencialmente desplazándose. Indudablemente, fueron dos líderes claramente opositores los que le disputaban al FPV la voluntad popular, pero sus estrategias de enunciación tenían como punto de partida la aceptación de la recomposición

kirchnerista, validando (y parasitando) el efecto de frontera con un pasado caracterizado por la debacle.

De esta forma, Bielsa rehabilitaba el núcleo del relato que Aníbal Ibarra articuló con éxito en las elecciones ejecutivas de 2003: la recomposición política encarada por Néstor Kirchner a nivel nacional había dejado atrás a un pasado investido por la corrupción, encarnado en la figura del empresario-dirigente futbolístico devenido en líder político. Pero el surgimiento de un progresismo opositor ponía en dificultades la simple oposición entre un presente kirchnerista y un pasado menemista, dificultades con las que Bielsa no supo lidiar para ubicarse en la disputa entre los dos primeros, quedando desdibujado el perfil de su imagen.

Tampoco el ARI supo construir una identidad que marginara completamente al oficialismo de la contienda e identificara un perfil progresista convincente. Durante el año y medio de la gestión de Néstor Kirchner, al ARI se le había presentado el dilema del debilitamiento de su diferenciación como fuerza que asociaba *progresismo* y *oposición*. Desde la participación en el gobierno porteño, cuyo titular se identificaba como aliado del Presidente, hasta la incorporación de una de las referentes del partido a la administración nacional, pasando por un conjunto de medidas y gestos presidenciales destinados a reforzar la barrera con el pasado y el signo progresista de la recomposición política, el discurso de denuncia contra la corrupción se enfrentaba al desgaste en tanto la interpretación kirchnerista de la actualidad fuera exitosa.

En este contexto, la estrategia de Elisa Carrió consistió en parasitar la frontera kirchnerista con el pasado, reconociendo ciertos méritos a la gestión Kirchner, pero sólo para luego denunciar al gobierno de "falso progresismo" y de encarar una recomposición política ilusoria, al mantener los vicios de la vieja política corporativista, autoritaria y personalista. En este sentido, el ARI representaba no sólo un progresismo de tipo económico, sino también cultural y, especialmente, *moral*. A través de este dispositivo, el ARI tradujo el clivaje "progresismo vs. década de los noventa" en términos morales de orden pre-ideológico: *corruptos* vs. *honestos*. El énfasis republicano (con tintes extraídos de cierta concepción antiperonista) en detrimento de la discusión de las cuestiones sociales, sumado a la incorporación de una figura claramente exterior al espectro de centroizquierda, derivó en un desplazamiento de la concepción del progresismo, que no todo el electorado asumió como propia.

En este contexto, el macrismo intentó operar el mismo desplazamiento respecto de la versión kirchnerista del progresismo. Reiterando el núcleo de los elementos que hicieron a la enunciación de Mauricio Macri en 2003 (básicamente, a. la localización de la campaña, evitando la confrontación con el Presidente y

centrando difusamente el discurso en Ibarra; y *b.* el foco en la gestión en detrimento de la negatividad política, como dispositivo de diferenciación frente a “los políticos” que discuten y no resuelven “los problemas de la gente”), la alianza con López Murphy permitió la incorporación de nuevos matices al perfil macrista.

El lanzamiento de PRO buscó no caer del lado de afuera en la frontera del progresismo y centrarse en los aspectos técnico-administrativos de la gestión, imputando estos valores como déficit en la recuperación política y económica. La denuncia de “falso progresismo”, un progresismo centrado en la retórica, tomó nuevos impulsos luego de la crisis del gobierno de Ibarra, presentando como contracara un progresismo de la gestión, es decir, una voluntad política de progreso social asentado en la capacidad transformadora de la máquina administrativa estatal. En este punto, un híbrido. La asociación entre política y gestión había sido el tradicional baluarte de una derecha privatista y liberal, pero ahora aparecía unido a una revalorización de la intervención estatal y de la capacidad del Estado para reformar a la sociedad, sobre todo en el eje de la “seguridad”, en sus múltiples dimensiones (es decir, bajo la antedicha definición general de la necesidad de un Estado protector de “todos” frente a la amenaza de “algunos”). Las similitudes con la concepción desideologizada de lo público en el propio discurso de Ibarra pueden aparecer, en este sentido, como significativas, cuestión que será aún más notoria en la campaña 2007.

El contundente triunfo de Mauricio Macri (con 34,09% de los votos a diputado nacional) en todas las circunscripciones porteñas, incluyendo las del centro de la ciudad, por sobre Elisa Carrió (22,01%) y Rafael Bielsa (20,49%), fue el principal resultado de este proceso. Un nuevo equilibrio de fuerzas, con un claro predominio del macrismo (que retenía su caudal electoral intacto incluso en los distritos que, se suponía, le eran esquivos), seguido por dos fuerzas progresistas de expresión nacional, parecía anunciar el fin de la fragmentación y la fluctuación políticas en la ciudad.

Pero, una vez pasadas las elecciones y la sospecha de oportunismo electoral, e incluso antes de la renovación del cuerpo legislativo, la nueva relación de fuerzas (con un macrismo consolidado y homogéneo, un ARI tan fortalecido como opositor, y una izquierda diezmada pero intransigente) se hizo patente en el avance hacia la suspensión y el Juicio Político, poniéndose nuevamente en crisis la delimitación de estos espacios y la instalación de una normalidad institucional.

En esta instancia, Ibarra tejió una estrategia defensiva en torno a su popularidad en los sondeos de opinión⁷ y a la protección del gobierno nacional (cuyo bloque legislativo era clave para sostener al Jefe de Gobierno). En el campo de la opinión pública, el ex aliancista buscó, como ya anticipáramos, la

identificación con un espacio progresista amenazado por un pasado privatista, y combinó la exhibición de las mencionadas encuestas y el apoyo de diversos actores de la sociedad civil, en pos de mostrar que la sociedad entera aceptaba (y *reclamaba*) su continuidad, con la constante deslegitimación de sus adversarios y de la propia instancia del proceso. Pero esta estrategia se reveló incapaz de disuadir a los opositores luego de las elecciones, debido a la capacidad de presión de los grupos de familiares de las víctimas, los cuales, si bien nunca contaron con un masivo apoyo del público, movilizaron estratégicamente un recurso de gran potencia: la amenaza de descrédito a quienes no accedieran a sus reclamos inmediatos (Mauro y Montero: 2006). Esta capacidad de "mandar al frente" resultó decisiva en un contexto de desagregación institucional y desconfianza de los ciudadanos, y contrarrestaba eficazmente la simpatía pasiva de la opinión pública hacia Ibarra en las encuestas. El fracaso de esta línea de acción tuvo sus repercusiones en el apoyo kirchnerista en la Sala Juzgadora. El bloque oficialista resultó ser el más indisciplinado en los momentos críticos (tanto en la instancia de acusación como de destitución, pero también en la primera avanzada por la interpelación), en una clara pugna por la conducción del kirchnerismo en la capital.

El desenlace de la crisis política del gobierno ibarrista, con las equívocas posiciones de las distintas fuerzas de centroizquierda frente a las demandas lideradas por los grupos de familiares de las víctimas, ofrece un ejemplo de cómo ciertas expresiones de descontento, incapaces de por sí de salir de la mera particularidad de sus reclamos, constituyen un desafío y una interpelación al propio lazo representativo, y en este sentido son herederas de la crisis de 2001. Efectivamente, Ibarra fue incapaz de ofrecer una respuesta política eficaz a estas demandas, pero las demás fuerzas políticas identificadas con un espacio progresista fueron igualmente incapaces de construir una respuesta al problema de las instancias de control y regulación del Estado por fuera del mero oportunismo o la apelación a valores individuales y pre-políticos como la "libertad de conciencia".

El gobierno provisional de Jorge Telerman incentivó la continuidad de la dinámica de realineamientos políticos permanentes, al impulsar desde el comienzo la instalación de su candidatura para renovar el mandato, constituyendo vertiginosamente un espacio político identificado con el progresismo desde los fragmentos de diferentes pertenencias partidarias, fueran oficialistas, opositoras o sencillamente prescindentes. Para dicho armado, Telerman golpeó las puertas de todos los candidatos presidenciales⁸ y negoció cargos con una multiplicidad de sectores "en disponibilidad", siguiendo ciertos criterios de construcción que había aplicado en la instalación del armado ibarrista en 2003 para la conformación de un

progresismo "independiente" (entre ellos, el manejo instrumental del calendario electoral).

En el ARI se irían agudizando dos tendencias que confluían en una crisis del espacio: el desdibujamiento del perfil de centroizquierda y la divergencia entre el liderazgo de Elisa Carrió y los sectores más institucionalizados del armado en la ciudad. La incorporación de Olivera, el posicionamiento en el Juicio Político y en ciertas sesiones en la Cámara de Diputados, y, como broche de oro, la desafiliación de la propia líder del partido para conformar una coalición con otras fuerzas políticas y sociales, confluyeron en volver difusas las certidumbres básicas respecto de cuál es el lugar de Elisa Carrió en el juego de fuerzas de la ciudad, lo que llevó a una profunda sangría de referentes del partido.

El primero de ellos fue el jefe del bloque en la Legislatura y presidente del partido en la ciudad, Fernando Melillo, quien se acercara a las filas del kirchnerismo. Su sucesor en ambos roles, Fernando Cantero, duraría sólo unos cuantos meses más, hasta que el partido fuera intervenido por las autoridades nacionales, luego de que las divergencias alcanzaran su punto más álgido con la negativa de la dirección partidaria porteña a aliarse con Patricia Bullrich en la Coalición Cívica. En este sentido, la política coalicional del ARI de cara a las elecciones 2007 fue errática y generó una fuerte fragmentación en el partido, al cual la propia Carrió impulsó a diluir en un armado difuso con socios inestables. La derrota electoral posterior sólo agravaría la situación, dejando al partido en capital profundamente diezmado precisamente en la antesala de las elecciones presidenciales.

El kirchnerismo apareció dividido por el surgimiento de Jorge Telerman como candidato, aunque Alberto Fernández finalmente consiguió alinear a casi toda la tropa detrás de la candidatura de Daniel Filmus, logrando el segundo lugar en la elección local, pocas semanas después de que los sondeos lo señalaran como un perfecto desconocido para el electorado. Sin embargo, el desgaste en la pelea con el telermismo para lograr ese segundo lugar dio una imagen de politiquería vacía y desdibujó el carácter progresista de la oferta, que aparecía ante el público más como una interna entre facciones que como una competencia política.

Todo este panorama, radicalmente diferente del escenario de 2003 (con una división entre el progresismo de Ibarra y la centroderecha de Macri, acompañados por Bullrich y Zamora) e incluso del de 2005 (con Ibarra desaparecido, y una división en tres espacios con predominio del macrismo por sobre el ARI y el kirchnerismo), redundaba en un crecimiento abrumador del macrismo, hasta ahora menos fluctuante y más homogéneo que el resto de las fuerzas. De esta forma, Mauricio Macri (sostenido en un discurso que profundizaba su corrimiento del perfil

de centroderecha, acompañado por Gabriela Michetti en la fórmula, e instalando a Mariano Narodowski en la lista legislativa) lograba imponerse en primera vuelta con 200 mil votos más que en 2003, por sobre el kirchnerismo (que colgaba la boleta de Aníbal Ibarra, de fuerte participación en la campaña) y el telermismo (que colgaba la boleta del ARI, de fuerte participación en la campaña), superando incluso la sumatoria de los dos últimos juntos, apenas a las puertas de la mayoría absoluta de los votos y logrando una hegemónica primera minoría en la Legislatura.

Conclusiones: ¿Crisis de un modelo o un modelo de crisis?

A lo largo del presente artículo hemos repasado el proceso de recomposición y crisis de la retórica progresista. Comenzamos señalando de qué forma hacia el final (adelantado) del primer período de Aníbal Ibarra en el gobierno porteño, la fragmentación partidaria y la desafección ciudadana aparecían como elementos excepcionales, en tanto la crisis de 2001 había instalado la incertidumbre en todas las áreas de la vida colectiva. Luego describimos de qué manera la aparición de Néstor Kirchner instituyó una regeneración del lazo representativo, en tanto edificaba una diferenciación respecto del pasado reciente y señalaba un cambio de rumbo para la Argentina; interpretación de la que se valió el Jefe de Gobierno para darle cuerpo a su perfil progresista, ordenando la competencia política con Mauricio Macri en términos de centroizquierda y centroderecha, que el candidato ganador en primera vuelta no pudo desmontar.

Con un espectro político mínimamente ordenado, el segundo gobierno de Ibarra se iniciaba frente al desafío de contener en su seno a fuerzas electoralmente rivales, con el agregado de la preeminencia de una oposición más numerosa y homogénea en el legislativo local. Con el correr de los meses, la centrifugación de las fuerzas oficialistas fue acompañada de la disolución de los bloques que otrora acompañaran a Luis Zamora y Patricia Bullrich, generándose todo tipo de cruces y transformaciones en la morfología del cuerpo legislativo, cada vez más caracterizado por el pragmatismo y el personalismo, tanto en momentos normales como de crisis. En este sentido, hemos desarrollado los posicionamientos de los actores políticos respecto de la responsabilidad del Jefe de Gobierno en la catástrofe de Cromagnon, y cómo esta coyuntura forzó la cohesión o ruptura definitiva de ciertas fuerzas, en un clima caracterizado por la incertidumbre y la ausencia de mediación política para contener a los particulares damnificados y al público en general, necesitado de una elaboración pública que permitiera dar sentido a tamaño desastre.

Hemos visto también, como los procesos electorales de 2005 y 2007 reavivaron la fragmentación y regeneraron una política coalicional alrededor de ciertas personalidades. En este sentido, la transformación de los contendientes (y la desaparición circunstancial de algunos, como el propio Jefe de Gobierno en 2005, o el surgimiento de otros, como el sello del Presidente) transformó el escenario hasta hacerlo irreconocible en los términos previos. Paralelamente, las estrategias de campaña de los candidatos avanzaron en pos de reconfigurar las coordenadas ideológicas en las que se habían producido las elecciones de 2003: basten como ejemplos los esfuerzos de Mauricio Macri para no ser ubicado como enemigo del progresismo; y los de Elisa Carrió por captar nuevas porciones del electorado opositoras a un Presidente que le robaba el protagónico de la centroizquierda. Con la destitución de Ibarra y la aparición de Telerman en la competencia, el escenario de fluctuación no hizo más que profundizarse: el progresismo asentado en la protección de “todos” era una figurita repetida en los discursos de los tres candidatos principales.

¿Cómo abordar la dinámica política porteña, si no es en los términos de la continuidad de actores políticos estables, o de la permanencia de polos ideológicos en pugna? Algunos analistas han trasladado los elementos de estabilidad del sistema de los partidos a los ciudadanos, sobre el supuesto de una estabilidad “ideológica” en el comportamiento electoral, como referencia común de un conjunto variable de fuerzas políticas en constante transformación (Calvo y Escolar: 2005). En este sentido, el argumento consiste en comprobar un clivaje permanente entre centroderecha y centroizquierda (o, si se prefiere, conservadurismo y progresismo), a partir de un anclaje geográfico (el norte de la ciudad vs. el centro-oeste), que encuentra sus raíces, por supuesto, en la condición socioeconómica de estos segmentos del electorado (sectores de ingresos altos vs. sectores medios).

A primera vista, dicha interpretación parece ser contundente. Habría entonces una continuidad en las costumbres y comportamientos del electorado aunque éstos se hayan alejado de los signos partidarios, cosa que puede verificarse identificando las transferencias de votos entre elecciones. Si los partidos tradicionales se han desideologizado hasta la casi implosión, sus tradiciones perviven en las formas de entender el proceso político que sostienen quienes fueron sus bases, y que hoy buscan identificar, en una oferta fluctuante, esos elementos que les permitan encontrar un objeto sobre el cual proyectar sus preferencias.

Ahora bien, el triunfo de Mauricio Macri en las elecciones 2007 es una muestra concluyente de los límites de dicha interpretación: Macri ganó en todos los distritos de la ciudad y en todos los niveles sociales. Al ya reconocido esquema norte-sur (o sectores altos y sectores populares) que lo benefició en 2003 y que

traía reminiscencias menemistas (recordemos que, en su momento, esta "alianza" entre sectores populares y sectores altos era vista casi como una abominación irracional para los analistas políticos), el empresario centró su crecimiento en los sectores de clase media⁹ (entre los cuales, dicho sea de paso, ya contaba con adhesiones en 2003 y en 2005, aunque ciertamente menores en proporción que en las otras dos zonas). ¿Acaso estos sectores simplemente giraron hacia la derecha? ¿O debemos encontrar la respuesta en un principio de división política diferente en la campaña de 2007? Si tomamos en consideración el incremento de votos proyectado hacia la segunda vuelta¹⁰, éstos provienen en gran parte de los votos dirigidos hacia el progresismo en la primera (representado, de diferente forma, en Telerman, Walsh y Lozano). Evidentemente ya no podemos encontrar en el electorado porteño esa estabilidad ni esa morfología que se suponía lo caracterizaba.

Este novedoso fenómeno pierde su carácter sorprendente si analizamos ciertos elementos de más larga data que ponen en cuestión la identificación de estos dos grupos homogéneos de electores. En primer lugar, a la división centro-norte se le escapa el difícilmente enmarcable comportamiento electoral del sur. Clasificarlo dentro del espectro peronista no soluciona las cosas, primero, si con "peronismo" nos referimos a una fuerza política concreta, estaríamos sobrevalorando a un partido históricamente marginado en la ciudad, y, segundo, si nos referimos a una tradición política, estaríamos afirmando que un tercio de la ciudad sencillamente escapa a la bipolaridad "ideológica" planteada anteriormente, abriendo el campo a una variedad de posibilidades que sencillamente desdibuja la tesis de una estabilidad en el comportamiento electoral.

En este sentido, los procesos electorales mencionados anteriormente presentan esquemas de "alianzas" entre las tres franjas que ponen de manifiesto que la articulación de intereses de sectores diversos es, desde el comienzo, un proceso de construcción de identidades que desdibujan estas divisorias: si en 2003 encontrábamos cuatro fuerzas apoyadas por sectores medianamente homogéneos (Ibarra y Zamora con apoyo de la zona centro-oeste, Bullrich del norte y Macri de las zonas sur y norte), en 2005 la competencia política se reagrupó en tres conglomerados heterogéneos (Macri superando su media en las zonas sur y norte, pero imponiéndose en todas las franjas, Carrió en superando ligeramente su performance global en las zonas el norte y centro-oeste, y Bielsa en las zonas sur y centro-oeste), y en 2007, como afirmamos anteriormente, el escenario se modificó radicalmente (Macri imponiéndose en todos los sectores, especialmente sobre el crecimiento en la zona centro-oeste, y tanto Filmus como Telerman con

performances ligeramente superiores al global en las zonas sur y centro-oeste). ¿Qué quedan, entonces, de esas pertenencias estables de una elección a otra?

El error subyacente en este tipo de interpretaciones consiste en no tomar en cuenta el hecho de que la propia distinción entre progresismo y conservadurismo no es otra cosa que *un producto de la estructuración de la escena política en cada coyuntura*. De esta forma, la identificación y segmentación del electorado bajo estas categorías, lejos de ser un dato en consideración de los líderes para definir sus estrategias de campaña, es el resultado de dichas estrategias. En este sentido, estudiar las transferencias de voto como “internas” a cierto espectro ideológico sólo puede dar resultados positivos si nos ubicamos dentro de los principios de lectura que los propios candidatos ofrecen. Si no fuera así, ¿cómo explicar el apoyo del electorado progresista al conservador Partido de la Ciudad?, ¿o que los votos dirigidos hacia coaliciones integradas por UCEDE o por Nueva Dirigencia puedan ser leídos como expresiones de centroizquierda (los casos de la Alianza en 2000, Más Buenos Aires en 2007 y Frente para la Victoria en 2005 y 2007) o de centroderecha, según la elección de que se trate?, ¿o la problemática transferencia de votos de Rodríguez Saá hacia Ibarra y Zamora en 2003?

Con ello no negamos que los candidatos se formen constantemente una imagen de las preferencias del público y estudien formas alternativas de segmentación, simplemente intentamos enfatizar que en esa auscultación de las preferencias sólo se está definiendo un horizonte de clivajes posibles y no creencias o identidades permanentes. Es decir, la distinción entre centroderecha y centroizquierda en la ciudad de Buenos Aires funciona como un principio de diferenciación política *vacío*, que debe ser reactualizado (y, por ende, redefinido sobre nuevas bases) en cada coyuntura (en los términos de *anticorrupción*, *anti-década-de-los-noventa*, *contrato moral* o *cultura de vida “afrancesada”*). Es un error asociar esta “materia prima” sobre la que se estructuran las interpelaciones políticas de los candidatos con identidades políticas estables.

¿Cómo interpretar la dinámica política porteña? Como una escena en constante recomposición, cuyo ritmo obedece a los procesos electorales, pero que también se ve condicionada por la irrupción de demandas ciudadanas que cobran un estado público de emergencia e inmediatez. Ambas instancias subvierten la lógica cotidiana de fragmentación, y obligan a los actores a tomar posición a favor o en contra de diversas personalidades clave para la inteligibilidad de la competencia política (los líderes de popularidad). En este sentido han de ser leídos los procesos de reagrupamiento en la Legislatura durante las elecciones de 2005 y 2007, o en las coyunturas críticas de la sanción del Código Contravencional o del Juicio Político al Jefe de Gobierno. En estos casos, el número de bloques unipersonales en la

Legislatura no necesariamente varió, pero sí se constituyeron interbloques y se delimitó claramente quién era quién dentro del recinto, obligando a muchos legisladores a definir sus afinidades y saltar de espacio político, o (con excepciones) alinearse en el propio.

Reiteramos, esta afirmación no implica que los partidos políticos hayan cesado en su existencia, o que el electorado funciona como una tábula rasa en cada ciclo electoral. Muy por el contrario, la centralidad del dispositivo electoral requiere de estructuras organizativas que ordenen la competencia política, así como de ciudadanos capaces de reconocerse en las interpelaciones de los líderes. Pero estas interpelaciones ya no se constituyen bajo la apelación a una tradición partidaria, sino que se elaboran sobre una multiplicidad de relatos superpuestos y se escenifican en la enunciación de los medios de comunicación masiva. Esta multiplicidad es ordenada por los líderes políticos a partir de la definición de problemas de agenda (polisémicos y flotantes), como la *corrupción* o la *inseguridad*, frente a los cuales la toma de postura implica, simultáneamente, hilvanar una trama narrativa en la que los ciudadanos puedan reconocerse, mediante la delimitación simultánea de un adversario político.

Pero este esquema en constante recomposición, es también un esquema en constante crisis, dado que estas tramas significativas que ordenan la competencia política son insuficientes frente a una realidad signada por la incertidumbre y por la yuxtaposición con otros actores que cargan con la enunciación pública y que también interpelan al electorado bajo la figura de la audiencia. En este sentido, la mediación política aparece como deficitaria para una ciudadanía desconfiada de los políticos, insatisfecha respecto de ciertas demandas básicas a las que un Estado desbordado no puede responder, e incapaz de mantener una forma de intervención e influencia estables más allá del estallido reactivo y momentáneo. Basándonos en estos tres elementos, y luego del recorrido realizado, podemos identificar de qué manera *issues* centrales como *corrupción* o *inseguridad*, cobran su significatividad política en tanto dan nombre a una experiencia que los trasciende, y que señala un déficit de comunidad política, que atraviesa tanto al Estado (en su insuficiencia para satisfacer las demandas sociales), como a los líderes (en su rol de mediación política), o a los propios ciudadanos (en sus intentos por producir influencia asociándose).

Este último punto puede, ciertamente, plantear una perspectiva desalentadora. Pero la constatación de que este modelo pueda ser inestable e, incluso, insatisfactorio en ciertos aspectos, no debe llevarnos a sostener la creencia infundada de que la situación contemporánea es simplemente un período de crisis, que será superado por una política racional de partidos estructurados, con una

pertenencia ideológica claramente identificable y una ciudadanía participativa, cuyas demandas se expresen de manera ordenada por los canales correspondientes. Estaremos, entonces, esperando el retorno de algo que, sencillamente, nunca existió.

Bibliografía

Aboy Carlés, G. (2001). *Las dos fronteras de la democracia argentina*. Rosario: Homo Sapiens.

Burdman, J. (1998). *Los porteños a las urnas. 1916-1997*. Buenos Aires: Editorial Centro de Estudios Unión para la Nueva Mayoría.

Calvo, E. y Escolar, M. (2005). *La nueva política de partidos en la Argentina. Crisis política, realineamientos partidarios y reforma electoral*. Buenos Aires: Prometeo.

Cavarozzi, M. y Abal Medina, J.M. (comps.) (2002). *El asedio a la política. Los partidos latinoamericanos en la era neoliberal*. Rosario: Homo Sapiens.

Cheresky, I.- Blanquer, J.M. (comp.) (2003). *De la ilusión reformista al descontento ciudadano*. Rosario: Homo Sapiens.

Cherny, N.- Natanson, J. (2004). "Personalismo, localismo y transversalidad: un análisis de las elecciones locales de 2003 en la ciudad de Buenos Aires" en Cheresky, I - Pousadela, I. *El voto liberado*, Buenos Aires, Paidós.

Manin, B. (1998). *Los principios del gobierno representativo*. Madrid: Alianza Editorial.

Mauro, S. (2005). "La campaña electoral por la Jefatura de Gobierno de Buenos Aires: estrategias políticas e inteligibilidad de la agenda", en *Revista Argentina de Sociología*, N° 4. Buenos Aires: CPS - Miño y Dávila editores.

Mauro, S. y Montero, F. (2006). "Dilemas de la recomposición en la escena porteña", en Cheresky, Isidoro (comp.) *La política después de los partidos*. Buenos Aires: Prometeo.

Mauro, S. y Natanson, J. (2006). "Ciudadanía y sociedad civil en la ciudad de Buenos Aires", en Cheresky, Isidoro (comp.) *Ciudadanía, sociedad civil y participación política*. Buenos Aires: Miño y Dávila editores

Novaro, M. (1994). *Pilotos de tormentas. Crisis de representación y personalización de la política en Argentina*. Buenos Aires: Letra Buena.

Novaro, M. (2000). *Representación y Liderazgo en las democracias contemporáneas*. Buenos Aires: Homo Sapiens.

Quiroga, H. (2005). *La Argentina en emergencia permanente*. Buenos Aires: EDHASA.

Schnapper, D. (2001). *La democracia Providencial*. Rosario: Homo Sapiens.

Notas

¹ La Alianza obtuvo el 56,9% de los votos para diputados nacionales, y el PJ retuvo sólo el 18%. También participó en la competencia una flamante fuerza electoral, producto de la coalición de dos partidos contruidos sobre la popularidad de dos ex funcionarios menemistas de alto perfil (Domingo Cavallo, con Acción por la República; y Gustavo Béliz, con Nueva Dirigencia). Dicha coalición se ubicó en el tercer lugar con un 17,1%.

² La fórmula Ibarra-Felgueras se impuso con el 49,4% de los votos, mientras que la fórmula Cavallo-Béliz obtuvo el 33,1%. El PJ oficial obtuvo sólo el 1,7% de los votos, mientras que la peronista disidente, Irma Roy, se colocó tercera con el 4,6%.

³ En las legislativas de 2001, 460 mil votos fueron impugnados, mientras que sólo 291 mil le dieron el triunfo a Rodolfo Terragno, embanderado en un discurso opositor al gobierno nacional de su propio color. El segundo lugar (con 175 mil votos) fue para un desprendimiento de la propia Alianza: el ARI, de Elisa Carrió.

⁴ Recrear (López Murphy) obtuvo el 25,85%; ARI (Carrió), el 19,86%; Frente para la Victoria (Kirchner), el 19,46%; Frente por la Lealtad (Menem), el 11,89%; y el Movimiento Nacional y Popular (Rodríguez Saá), el 8,13%.

⁵ No es la única intervención a contramano del progresismo que sostenía al Jefe de Gobierno. Tiempo antes, la legisladora Mirta Onega debió abandonar el bloque luego de una denuncia por discriminación y xenofobia, quedando relegada a un monobloque, pero siguiendo la disciplina correspondiente a la hora de votar en el recinto.

⁶ En este sentido, la estrategia de Ibarra no sólo consistió en instalar un relato alternativo al de sus adversarios, sino que también se combinó con intentos por invertir, en sus propios términos, la imagen de inútil con que se lo intentaba caracterizar. De esta forma, las primeras reacciones ante el incendio consistieron en escenificar una hiperactividad propia de un líder que le hace frente a la tragedia, apareciendo en los medios desde el primer momento para no quedar en la identificación con la desorientación delarruista, deslindando responsabilidades, aceptando denuncias, etc.

⁷ Incluso después de la destitución, una encuesta de Analogías, publicada por La Nación en marzo de 2006 revelaba que Aníbal Ibarra retenía un 69,5% de imagen

positiva (muy por encima de Carrió y Macri), y que un 62,5% del electorado porteño estaba en contra de la destitución (entre los que se encontraban electores tanto del FPV como del ARI y PRO).

⁸ Telerman dio preeminencia en su gabinete a un hombre de Roberto Lavagna, Guillermo Nielsen, quien finalmente abandonara su cargo luego de que la Legislatura reprobara el proyecto de presupuesto 2007. Fueron numerosos los intentos de acercamiento con el kirchnerismo, siempre obturados por la enemistad con su principal referente en la capital, Alberto Fernández, lo que generó disputas más o menos abiertas dentro del sector (incluso en el gabinete nacional). Finalmente, el Jefe de Gobierno sellaría su acuerdo con Elisa Carrió para presentar una fórmula unificada, con Enrique Olivera. No hubo muestras públicas de acercamiento hacia el macrismo, pero sí fueron constantes los trascendidos de acuerdos con la bancada de PRO para garantizar la gobernabilidad del distrito.

⁹ El mayor crecimiento de PRO entre 2003 y 2007 se registra en los barrios de Flores, Boedo, Caballito, Colegiales La Paternal y Villa Devoto (además de Belgrano, Saavedra y Villa Pueyrredón). En cada una de las circunscripciones correspondientes a dichos barrios, Mauricio Macri cosechó 10 puntos más que en la primera vuelta de 2003, superando incluso su performance en la segunda vuelta de la misma elección.

¹⁰ El presente artículo fue escrito con anterioridad al desarrollo de la segunda vuelta electoral, sin embargo, a la fecha han circulado diversos sondeos que indican un incremento en la intención de voto hacia la fórmula Macri-Michetti, registrándose una transferencia de votos desde el progresismo.

Anexo I. Desempeño de las tres primeras fuerzas políticas en la ciudad de Buenos Aires. 1994-1996

Año de la Elección	Cargos a elegir	Frepaso	UCR	PJ
1994	Convencionales Constituyentes Nac.	37,4%	24,5%	15,2%
1995	Presidente y vice Diputados	44,5% 35%	10,7% 20,3%	25,7% 23%
1996	Jefe y vicejefe de Gob. Convencionales Const. porteños	26,5% 37,4%	40% 27%	18,6% 15%